

No. 38070

**Argentina
and
Chile**

Treaty between the Republic of Argentina and the Republic of Chile for the promotion and reciprocal protection of investments (with protocol). Buenos Aires, 2 August 1991

Entry into force: *1 January 1995, in accordance with article 11*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 16 January 2002*

**Argentine
et
Chili**

Traité entre la République argentine et la République du Chili relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements (avec protocole). Buenos Aires, 2 août 1991

Entrée en vigueur : *1er janvier 1995, conformément à l'article 11*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 16 janvier 2002*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO
ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
LA REPUBLICA DE CHILE
SOBRE
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES**

La República Argentina y la República de Chile, denominadas en adelante "las Partes Contratantes;

Animadas del deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos Estados,

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los nacionales o sociedades de uno de los dos Estados en el territorio del otro Estado, que impliquen transferencias de capitales,

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un tratado pueden servir para estimular la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos,

Han convenido lo siguiente:

**Artículo 1
Definiciones**

Para los fines del presente Tratado:

- (1) El concepto "inversiones" designa, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país receptor, todo tipo de bienes que el inversor de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de ésta, en particular, pero no exclusivamente:
- a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda;
 - b) acciones, derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en sociedades, como también la capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior;
 - c) obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizada;

d) derechos de propiedad intelectual como, en especial, derechos de autor, patentes, diseños y modelos industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, know how y valor llave;

e) concesiones otorgadas por entidades de derecho público, incluidas las concesiones de prospección y explotación.

Ninguna modificación de la forma jurídica según la cual los activos y capitales hayan sido invertidos o reinvertidos afectará su calificación de inversiones de acuerdo con el presente Tratado.

2. El concepto "ganancias o rentas" designa las sumas obtenidas de una inversión en un período determinado, tales como las participaciones en los beneficios, los dividendos, los intereses, los derechos de licencia u otras remuneraciones.

3. El concepto "nacionales" designa:

a) con referencia a la República de Chile:

los chilenos en el sentido de la Constitución Política de la República de Chile;

b) con referencia a la República Argentina:

los argentinos en el sentido de las disposiciones legales vigentes en la Argentina.

4. El concepto "sociedades" designa todas las personas jurídicas, constituidas conforme con la legislación de una Parte Contratante y que tengan su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

5. No obstante lo establecido en el apartado 3 de este artículo, las disposiciones de este Tratado solamente se aplicarán a los nacionales de una Parte Contratante que no estén domiciliados por más de dos años en el territorio de la Parte Contratante donde la inversión se realizó y que prueben que las inversiones provienen del extranjero.

6. El término "territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres y marítimos, las zonas marinas y submarinas, en las cuales las Partes Contratantes ejercen derechos soberanos y jurisdicción conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.

Artículo 2

Promoción y Protección de las inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes promoverá las inversiones dentro de su territorio de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus disposiciones legales vigentes. En todo caso tratará las inversiones justa y equitativamente.
2. Gozarán de la plena protección del Tratado las inversiones que, de acuerdo con las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, hayan sido realizadas en el ámbito de la ley de esta Parte Contratante por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.
3. Ninguna de las Partes Contratantes perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el uso o el goce de las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a través de medidas arbitrarias o discriminatorias.

Artículo 3

Trato nacional y cláusula de la nación más favorecida.

1. Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante o a las inversiones en las que mantengan participaciones los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de nacionales y sociedades de terceros Estados.
2. Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con las inversiones, a un trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de terceros Estados.
3. Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales y sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones.
Dicho trato no se refiere tampoco a los privilegios acordados por una Parte Contratante a los nacionales o sociedades de un tercer Estado por una inversión realizada en el marco de un financiamiento concesional previsto por un tratado bilateral entre dicha Parte Contratante y el país al que pertenecen los citados inversores.

4. El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.

Artículo 4

Expropiación, Nacionalización y situaciones extraordinarias

1. Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante.
2. Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por ley fundada en causas de utilidad pública o de bien común, y deberán en tal caso ser previamente indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva o inminente, la nacionalización o la medida equivalente.

La indemnización deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equivalente, y el monto de la indemnización, deberán ser revisables en procedimiento judicial ordinario.

3. Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, no serán tratados por ésta menos favorablemente que sus propios nacionales o sociedades en lo referente a restituciones, compensaciones, indemnizaciones u otros resarcimientos. Estos pagos deberán ser libremente transferibles.

Artículo 5

Transferencias

1. Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, en particular:
 - a) del capital y de las sumas adicionales para el

- mantenimiento o ampliación de la inversión de capital;
- b) de las ganancias o rentas;
 - c) de la amortización de los préstamos definidos en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 1;
 - d) del producto de la venta o liquidación total o parcial de la inversión;
 - e) de las indemnizaciones previstas en el artículo 4.
2. La transferencia se efectuará sin demora de acuerdo a los procedimientos establecidos en el territorio de cada Parte Contratante, en moneda de libre convertibilidad y a la cotización vigente en cada caso, que deberá ser equivalente al tipo de cambio más favorable.
3. Una transferencia se considera realizada sin demora cuando se ha efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de dos meses, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud, debidamente presentada.

Artículo 6 Subrogación

1. En el caso de que una Parte Contratante o una de sus instituciones hubiera concedido una garantía contra riesgos no comerciales por inversiones efectuadas por uno de sus nacionales o sociedades en el territorio de la otra Parte Contratante y haya efectuado pagos a base de la garantía otorgada, dicha Parte Contratante o la institución será reconocida subrogada de derecho en la misma posición de crédito del inversor cubierto por la garantía. Para los pagos a realizarse en beneficio de la Parte Contratante o de su institución a base de dicha subrogación, se aplicarán respectivamente los artículos 4 y 5 del presente Tratado.
2. Los nacionales o sociedades tendrán derecho a demandar o hacerse parte en las acciones ya iniciadas, en orden a proteger los restantes derechos que puedan reclamar y que no hayan sido subrogados. De esta forma, habiéndose reclamado, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 10.

Artículo 7 Aplicación de otras normas más favorables

1. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de las obligaciones emanadas del derecho internacional no contempladas en el presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud

de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Tratado, en cuanto sea más favorable.

2. Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio.

Artículo 8 Ambito de aplicación

1. El presente Tratado se aplicará a las inversiones que se realicen a partir de su entrada en vigor por nacionales o sociedades de una Parte Contratante en el territorio de la otra. No obstante, también beneficiará a las inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia y que, según la legislación de la respectiva Parte Contratante, estuvieren registradas como inversión extranjera.
2. No se aplicará, sin embargo, a las controversias o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor, o relacionadas con hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o referidas a la mera permanencia de tales situaciones preexistentes.

Artículo 9 Solución de controversias entre Estados

1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas amigablemente por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes.
2. Si una controversia no pudiere ser dirimida de esa manera, será sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.
3. El tribunal arbitral será constituido ad-hoc; cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses, el Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la controversia a un tribunal arbitral.

4. Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro acuerdo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las dos Partes Contratantes o si se hallara también impedido, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos.
5. El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones son obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.
6. Si ambas Partes Contratantes fueren también Estados Contratantes del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados del 18 de marzo de 1965, no se podrá, en atención a la disposición del párrafo 1 del artículo 27 de dicho Convenio, acudir al tribunal arbitral arriba previsto cuando el nacional o la sociedad de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante hayan llegado a un acuerdo conforme al artículo 25 del Convenio. No quedará afectada la posibilidad de acudir al tribunal arbitral arriba previsto en el caso de que no se respete una decisión del Tribunal de Arbitraje del mencionado Convenio (artículo 27), o en el caso de subrogación conforme a lo establecido en el artículo 6 del presente Tratado.

Artículo 10

Solución de controversias relativas a inversiones

1. Toda controversia relativa a las inversiones, en el sentido del presente Tratado, entre una Parte Contratante y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la controversia.
2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida, a pedido del nacional o sociedad:

- o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia;
- o bien al arbitraje internacional en las condiciones descritas en el párrafo 3.

Una vez que un nacional o sociedad haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3. En caso de recurso al arbitraje internacional la controversia podrá ser llevada ante uno de los órganos de arbitraje designados a continuación a elección del nacional o sociedad:
 - al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Convenio haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el Reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I.;
 - a un tribunal de arbitraje ad-hoc establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
4. El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Tratado, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia -incluidas las normas relativas a conflictos de leyes- y a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión como así también a los principios del derecho internacional en la materia.
5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia.
6. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje o a un proceso judicial ya en marcha hasta que los procedimientos correspondientes hubieren sido concluidos, salvo que las partes en la controversia no hubieren cumplido el laudo del tribunal arbitral o la sentencia del tribunal ordinario, según los términos de cumplimiento establecidos en el laudo o en la sentencia.

Artículo 11
Entrada en vigor, Duración y Vencimiento

1. El presente Tratado será ratificado; los instrumentos de ratificación serán canjeados lo antes posible en Santiago, Chile.
2. El presente Tratado entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya efectuado el canje de los instrumentos de ratificación. Su vigencia será de diez años y se prolongará después por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración. Transcurridos diez años, el Tratado podrá denunciarse en cualquier momento, con un preaviso de doce meses.
3. Las disposiciones del presente Tratado continuarán siendo plenamente aplicables aún en los casos previstos por el artículo 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969.
4. Para las inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Tratado, las disposiciones de los artículos 1 a 10 seguirán rigiendo durante los quince años subsiguientes a la fecha de su terminación.

Hecho en Buenos Aires, el dos de agosto de mil novecientos noventa y uno en dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.

POR LA
REPUBLICA ARGENTINA

POR LA
REPUBLICA DE CHILE



GUIDO DI TELLA



ENRIQUE SILVA CIMMA



DOMINGO F. CAVALLO



CARLOS OMINAMI

PROTOCOLO

En el acto de la firma del Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, los Plenipotenciarios han adoptado además las siguientes disposiciones, que se considerarán parte integrante del Tratado:

1) Ad Artículo 3, punto 3

En el caso que una de la Partes celebrare en el futuro un Acuerdo de asociación con una unión aduanera o económica, un mercado común o una Zona de Libre Comercio, se convendrá la introducción de una modificación a la excepción del artículo 3, punto 3, párrafo 1.

2) Ad Artículo 4

Para los efectos de las causas en que se puede fundar la ley que afecte la propiedad, las Partes entienden que el concepto de bien común comprende las causales previstas en sus respectivos ordenamientos jurídicos vigentes.

3) Ad Artículo 5


No obstante las disposiciones del artículo 5, la República de Chile garantizará el derecho de repatriación del capital invertido por inversionistas argentinos, después de transcurrido el plazo de tres años, desde su internación, previsto en el Decreto Ley No 600 de 1974.

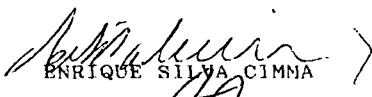
Lo dispuesto en el inciso anterior estará vigente mientras lo esté el plazo previsto en el referido Decreto Ley.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1991.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA

POR LA REPUBLICA CHILE


GUIDO DI TELLA


ENRIQUE SILVA CIMNA


DOMINGO F. CAVALLO


CARLOS OMINAMI

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC
OF CHILE FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION
OF INVESTMENTS

The Argentine Republic and the Republic of Chile, hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

Desiring to strengthen economic cooperation between the two States,

Intending to create favourable conditions for investments made by nationals or companies of either State in the territory of the other State, involving transfers of capital,

Recognizing that the promotion and protection of such investments under a treaty can encourage private economic initiatives and improve the well-being of both peoples,

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Treaty:

1. The term "investments" means, in accordance with the legal provisions of the receiving country, any kind of asset which an investor of one Contracting Party invests in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of such Contracting Party, in particular, but not exclusively:

- (a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens and pledges;
- (b) Shares, stocks in companies and other forms of participation in companies, as well as earnings capitalization with the right to be transferred abroad;
- (c) Liabilities or credits directly connected to an investment and which are lawfully contracted and documented in accordance with the legislation in force in the country in which the investment is made;
- (d) Intellectual property rights, such as, in particular, copyrights, patents, industrial and commercial designs and models, technical processes, know-how and goodwill;
- (e) Business concessions under public law, including concessions to search for, extract and exploit natural resources.

No change in the legal form in which the assets and capital are invested or reinvested shall affect their status as an investment under this Treaty.

2. The term "returns" or "income" shall mean the amounts yielded by an investment over a given period, such as profits, dividends, interest, license fees or other remuneration.

3. The term "nationals" shall mean:

- (a) With respect to the Republic of Chile: Chileans as defined in the Political Constitution of the Republic of Chile;

(b) With respect to the Argentine Republic: Argentines as defined in the legal provisions in force in Argentina.

4. The term "companies" shall mean any juridical person, established in accordance with the legislation of a Contracting Party, having its seat in the territory of the said Contracting Party, whether or not its activities are directed at profit.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this article, the provisions of this Treaty shall apply only to nationals of a Contracting Party who have not been domiciled for more than two years in the territory of the Contracting Party in which the investment was made and who can prove that such investment originates from abroad.

6. "Territory" shall mean, in addition to the areas situated within the land and maritime boundaries, the marine and submarine spaces over which the Contracting Parties exercise rights of sovereignty and jurisdiction in accordance with their respective legislation and with international law.

Article 2. Promotion and protection of investment

1. Each Contracting Party shall encourage investments by nationals or companies of the other Contracting Party in its territory and shall admit such investments in accordance with its legal provisions in force. In any case, each Party shall accord fair and equitable treatment to investments.

2. Investments made by nationals or companies of either Contracting Party in accordance with the laws of the other Contracting Party shall enjoy full protection under this Treaty.

3. Neither Contracting Party shall subject the management, utilization, use or enjoyment of investments of nationals or companies of the other Contracting Party in its territory to arbitrary or discriminatory measures.

Article 3. National treatment and most-favoured-nation clause

1. Neither Contracting Party shall subject investments in its territory by or with the participation of nationals or companies of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments of its own nationals or companies or to investments of nationals or companies of any third State.

2. Neither Contracting Party shall subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory, to treatment less favourable than it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third State.

3. Such treatment shall not include privileges which may be extended by either Contracting Party to nationals or companies of third States on account of its membership in a customs or economic union, common market or free trade area, or on account of its association with any such group. Nor shall such treatment include privileges extended by either Contracting Party to nationals or companies of a third State on account of an investment

made under concessionary financing provided for in a bilateral treaty between the said Contracting Party and the country to which the aforementioned investors belong.

4. The treatment under this article shall not include privileges accorded by a Contracting Party to nationals or companies of third States by virtue of a double taxation avoidance agreement or other tax agreements.

*Article 4. Expropriation, nationalization
and exceptional situations*

1. Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy full protection as well as juridical security in the territory of the other Contracting Party.

2. Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subject to any other measure the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalization in the territory of the other Contracting Party, except where the law so requires for reasons of public interest or the public good and against prior compensation. Such compensation shall be equivalent to the value of the investment appropriated immediately before the effective or impending expropriation, nationalization or equivalent measure became public knowledge.

The compensation shall be readily convertible and freely transferable. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation shall be subject to review by due process of law.

3. Nationals or companies of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or insurrection shall be accorded by the latter Contracting Party treatment which is no less favourable than that accorded to its own nationals or companies, as regards restitution, compensation, indemnification or other valuable consideration. Such payments shall be freely transferable.

Article 5. Transfers

1. Each Contracting Party shall guarantee to nationals or companies of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment, in particular:

- (a) The capital and additional amounts to maintain or increase the capital invested;
- (b) The returns or earnings;
- (c) Repayment of loans defined in article 1, paragraph I (c);
- (d) The proceeds from the sale of the whole or any part of the investment;
- (e) The compensation provided for in article 4.

2. The transfer shall be effected without delay in accordance with the procedures established in the territory of each Contracting Party, in freely convertible currency and at the rate of exchange applicable in each case, which shall be equivalent to the most favourable rate of exchange.

3. A transfer shall be deemed to have been made "without delay" if it is effected within the period normally required for the completion of transfer formalities. Such period shall commence with the submission of the relevant request and may in no circumstances exceed two months.

Article 6. Subrogation

1. If a Contracting Party or one of its agencies makes payments under a guarantee it has accorded against non-commercial risks in respect of investments made in the territory of the other Contracting Party by one of its nationals or companies, the subrogation of the said Contracting Party or its agency in the same rights as the investor covered by the guarantee shall be recognized. Articles 4 and 5, respectively, of this Treaty shall apply in respect of payments to be made to the Contracting Party or its agency on the basis of such subrogation.

2. Nationals or companies shall have the right to file suit or to become a party to actions already initiated to protect such remaining rights as they might claim and which have not been subrogated. Following the institution of the proceeding, the procedure established in article 10 shall be followed.

Article 7. Application of other more favourable rules

1. If the legislation of one Contracting Party or obligations under international law not covered by this Treaty that are currently existing or to be established between the Contracting Parties contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by nationals or companies of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided for by this Treaty, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, take precedence over this Treaty.

2. Each Contracting Party shall observe any other obligation that it may have entered into with regard to investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party.

Article 8. Scope of application

1. This Treaty shall apply to investments made after its entry into force by the nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party. It shall also apply, however, to investments made prior to its entry into force and which, according to the legislation of the Contracting Party in question, were registered as foreign investments.

2. This Treaty shall not apply, however, to disputes or claims that arose or were settled prior to its entry into force, or concerning events that occurred prior to its entry into force or related to the mere continuation of such pre-existing situations.

Article 9. Settlement of disputes between States

1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Treaty shall, as far as possible, be settled amicably by the Governments of both Contracting Parties.

2. If a dispute cannot be thus settled, it shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall be established on an ad hoc basis. Each Contracting Party shall appoint one member and these two members shall, by agreement, designate a national of a third State as chairman, who shall be appointed by the Governments of the two Contracting Parties. The members shall be appointed within two months and the chairman within three months after either Contracting Party informed the other Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the time limits provided for under paragraph 3 are not met, and in the absence of any other agreement, either Contracting Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the appointments shall be made by the Vice-President. If the Vice-President is also a national of either Contracting Party or is also prevented from discharging the said function, the appointments shall be made by the member of the Court next in seniority who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall take its decisions by a majority of votes. Its decisions shall be binding. Each Contracting Party shall defray the costs of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The costs of the chairman and the remaining costs shall be defrayed in equal parts by the two Contracting Parties. In all other respects, the tribunal shall determine its own procedure.

6. If both Contracting Parties are also parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, of 18 March 1965, the arbitral tribunal provided for above may, in consideration of the provisions of article 27, paragraph 1, of the said Convention, not be appealed to insofar as agreement has been reached between the national or company of one Contracting Party and the other Contracting Party under article 25 of the Convention. This shall not affect the possibility of appealing to such arbitral tribunal in the event that a decision of the arbitral tribunal established under the said Convention (article 27) is not complied with, or in the event of subrogation in accordance with the provisions of article 6 of this Treaty.

Article 10. Settlement of investment disputes

1. Any dispute concerning investments, as defined in this Treaty, between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled by amicable consultations between the two parties to the dispute.

2. If the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the parties gave notice thereof, it shall, at the request of the national or company, be submitted to:

- The domestic courts of the Contracting Party involved in the dispute; or

- International arbitration according to the provisions of paragraph 3.

Once a national or company has submitted the dispute to the courts of the Contracting Party concerned or to international arbitration, the choice of that procedure shall be final.

3. In the event of recourse to international arbitration, the dispute may be submitted to one of the arbitration bodies listed below, at the choice of the national or company:

- The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature in Washington on 18 March 1965, when both States Parties to this Agreement have acceded to it. If this condition is not met, each Contracting Party consents that the dispute shall be submitted to arbitration in accordance with the regulations of the ICSID Additional Facility;
- An ad hoc arbitral tribunal set up in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

4. The arbitral tribunal shall issue its ruling in accordance with the provisions of this Treaty, the laws of the Contracting Party involved in the dispute, including its rules on conflict of laws, and the terms of any specific agreement concluded in relation to the investment and the relevant principles of international law.

5. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute.

6. The Contracting Parties shall refrain from pursuing, through diplomatic channels, arguments concerning the arbitration or a judicial process already under way until the respective proceeding has been concluded, unless the parties to the dispute have failed to abide by the award of the arbitral tribunal or by the judgment of the ordinary court, in accordance with the terms of compliance set out in the award or judgment.

Article 11. Entry into force, duration and termination

1. This Treaty shall be ratified and the instruments of ratification exchanged as soon as possible in Santiago, Chile.

2. This Treaty shall enter into force one month after the date of the exchange of instruments of ratification. It shall remain in force for a period of 10 years and shall be renewed thereafter for an indefinite period unless one of the Contracting Parties denounces it in writing 12 months before its expiry. After 10 years, the Treaty may be denounced at any time by giving 12 months advance notice.

3. The provisions of this Treaty shall remain fully in force even in the cases provided for by article 63 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, of 23 May 1969.

4. Investments made prior to the date of termination of this Treaty shall continue to be protected by the provisions of articles I to I0 for an additional period of 15 years from the date of termination.

Done at Buenos Aires on 2 August 1991 in duplicate originals, both being equally authentic.

For the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA

DOMINGO F. CAVALLO

For the Republic of Chile:

ENRIQUE SILVA CIMMA

CARLOS OMINAMI

PROTOCOL

In signing the Treaty between the Argentine Republic and the Republic of Chile for the promotion and reciprocal protection of investments, the plenipotentiaries have also adopted the following additional provisions, which shall be deemed an integral part of the Treaty:

1. Ad article 3, paragraph 3

In the event that either Party enters in the future into an agreement of association with a customs or economic union, a common market or a free trade area, an amendment to paragraph 3 of article 3 shall be introduced by mutual agreement.

2. Ad article 4

With respect to the grounds on which the law governing ownership may be based, the Parties agree that the concept of public good includes the grounds set out in their respective legislations in force.

3. Ad article 5

Without prejudice to the provisions of article 5, the Republic of Chile shall guarantee the right to repatriate capital invested by Argentine investors after the period of three years provided for in Decree-Law No. 600 of 1974, from the date that the capital was invested, has elapsed.

The provision contained in the paragraph above shall remain in force for as long as the period of time provided for in the aforementioned Decree-Law continues to apply.

Buenos Aires, 2 August 1991

For the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA
DOMINGO F. CAVALLO

For the Republic of Chile:

ENRIQUE SILVA CIMMA
CARLOS OMINAMI

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU
CHILI RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION
RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

La République argentine et la République du Chili, (ci-après dénommées " les Parties contractantes "),

Désireuses d'intensifier la coopération économique entre les deux États;

Entendant créer des conditions favorables aux investissements des nationaux et des sociétés de chacun des deux États sur le territoire de l'autre État, impliquant des transferts de capitaux;

Reconnaissant que la promotion et la protection de ces investissements par voie de traité sont de nature à stimuler l'initiative économique privée et à accroître la prospérité des deux peuples;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Traité :

1. Le terme " investissements " désigne tout type de biens que l'investisseur d'une Partie contractante investit sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à la législation de cette dernière, en particulier mais non exclusivement :

- a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques et gages;
- b) les actions, droits de participation à des sociétés et autres formes de participation à des sociétés, ainsi que la capitalisation des bénéfices avec droit de transfert à l'extérieur;
- c) les obligations ou créances directement liées à un investissement et contractées et documentées selon les dispositions en vigueur dans le pays où est effectué l'investissement;
- d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les brevets, les dessins et modèles industriels et commerciaux, les procédés techniques, le savoir-faire et toute valeur clé;
- e) les concessions accordées par des entités de droit public, y compris les concessions de prospection et d'exploitation.

Toute modification de la forme juridique sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis est sans effet sur leur caractère d'investissement.

2. Le terme " gains " ou " revenus " désigne les sommes rapportées par un investissement au cours d'une période déterminée, telles que participation aux bénéfices, dividendes, intérêts, droits de licence et autres rémunérations.

3. Le terme " nationaux " désigne :

- a) En ce qui concerne la République du Chili :
Les Chiliens, aux sens de la Constitution politique de la République du Chili;
- b) En ce qui concerne la République argentine :
Les Argentins aux sens des dispositions légales en vigueur en Argentine.

4. Le terme " sociétés " désigne toutes les personnes morales constituées selon la législation de l'une des Parties contractantes dont le siège est situé sur le territoire de ladite Partie contractante, que leur activité soit menée à des fins lucratives ou non.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas aux nationaux d'une Partie contractante qui sont domiciliés depuis plus de deux ans sur le territoire de la Partie contractante sur lequel est effectué l'investissement, à moins qu'ils ne prouvent que l'investissement en question provient de l'étranger.

6. Le terme " territoire " désigne, outre les zones inscrites dans les limites terrestres et maritimes de chaque Partie contractante, les zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent des droits souverains ou leur juridiction, en vertu de leur législation nationale et du droit international.

Article 2. Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties contractantes s'efforce de promouvoir sur son territoire les investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante et accueille ces investissements conformément à ses lois et règlements en vigueur. En toutes circonstances, ces investissements bénéficient d'un traitement juste et équitable.

2. Les investissements effectués conformément aux dispositions légales de l'une des Parties contractantes sur son territoire par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante bénéficient de la pleine protection du Traité.

3. Ni l'une ni l'autre Partie contractante n'entrave, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation ou la jouissance des investissements effectués sur son territoire par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 3. Traitement national et Clause de la nation la plus favorisée

1. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investissements de nationaux ou de sociétés de l'autre Partie contractante, ou les investissements dans lesquels les nationaux ou les sociétés de l'autre Partie contractante détiennent des participations, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres nationaux ou sociétés ou aux investissements de nationaux ou sociétés d'un État tiers.

2. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs activités liées aux investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres nationaux ou sociétés ou aux nationaux ou sociétés d'un État tiers.

3. Ce traitement ne concerne pas les privilèges que l'une des Parties contractantes accorde aux nationaux et sociétés d'États tiers du fait de leur participation à une union douanière ou économique, à un marché commun ou à une zone de libre échange, ou de leur adhésion future à de tels groupements. Ce traitement ne concerne pas non plus les privilèges accordés par l'une des Parties contractantes aux nationaux et sociétés d'États tiers du fait d'un investissement effectué dans le cadre d'un financement concessionnel prévu en vertu d'un traité bilatéral entre ladite Partie contractante et le pays dont sont ressortissants les investisseurs en question.

4. Le traitement prévu dans le présent article n'englobe pas les privilèges accordés par une Partie contractante aux ressortissants ou sociétés d'États tiers du fait d'un accord portant sur la prévention de la double imposition et d'autres accords fiscaux.

*Article 4. Expropriation, nationalisation
et situations extraordinaires*

1. Les investissements de nationaux ou de sociétés de l'une des Parties contractantes jouissent d'une pleine protection et d'une pleine sécurité juridique sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Les investissements de nationaux ou de sociétés de l'une des Parties contractantes ne peuvent être expropriés, nationalisés ou faire l'objet d'autres mesures dont les effets équivaldraient à une expropriation ou à une nationalisation sauf pour cause d'utilité publique ou de bien commun, et doivent alors bénéficier d'une indemnisation. L'indemnisation doit correspondre à la valeur de l'investissement exproprié immédiatement avant la date de l'annonce publique de l'expropriation effective ou imminente, de la nationalisation ou de la mesure équivalente.

L'indemnité doit être effectivement réalisable et librement transférable. La légalité de l'expropriation, de l'indemnisation ou de la mesure équivalente, ainsi que le montant de l'indemnité, doivent pouvoir être revues dans le cadre de procédures judiciaires ordinaires.

3. Les nationaux ou sociétés de l'une des parties contractantes dont les investissements subissent des pertes à cause d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national ou d'une insurrection qui se produit sur le territoire de l'autre Partie contractante ne sont pas traités par celle-ci de façon moins favorable que ses propres nationaux ou sociétés quant à la restitution, à la compensation, à l'indemnisation ou à toutes autres formes de dédommagement. Les versements correspondants doivent être librement convertibles.

Article 5. Transferts

1. Chaque Partie contractante garantit aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante le libre transfert des paiements en rapport avec un investissement, et notamment :

- a) le capital et les fonds additionnels nécessaires au maintien ou à l'augmentation de l'investissement de capital;
- b) les gains ou revenus;
- c) l'amortissement des prêts définis à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article premier;

- d) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;
- e) les indemnités prévues à l'article 4.

2. Le transfert s'effectue sans délai, selon les procédures établies sur le territoire de chaque Partie contractante, en monnaie librement convertible et cours en vigueur dans chaque cas, qui est l'équivalent du taux de change le plus favorable.

3. On considère qu'un transfert est effectué sans délai lorsqu'il est réalisé dans le délai normalement nécessaire pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ce délai, qui ne peut en aucun cas excéder une durée de deux mois, commence à courir au moment de la remise de la demande correspondante, présentée dans les formes requises.

Article 6. Subrogation

1. Au cas où une Partie contractante ou l'une de ses institutions a accordé une garantie contre des risques non commerciaux pour des investissements effectués par l'un de ses nationaux ou l'une de ses sociétés sur le territoire de l'autre Partie contractante et a effectué des paiements sur la base de la garantie accordée, ladite Partie contractante ou l'institution en question est reconnue subrogée aux droits dans la même mesure que l'investisseur couvert par la garantie. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent Traité s'appliquent respectivement pour les paiements à effectuer au profit de la Partie contractante ou de son institution sur la base de ladite subrogation.

2. Les nationaux ou sociétés ont le droit de demander à bénéficier des actions engagées afin de protéger les autres droits qu'ils peuvent revendiquer et qui n'ont pas été subrogés. Ainsi, une fois ces droits revendiqués, la procédure applicable est celle décrite à l'article 10.

Article 7. Application d'autres normes plus favorables

1. S'il résulte des dispositions légales de l'une des Parties contractantes ou d'obligations, actuelles ou futures, découlant du droit international en dehors du présent Traité entre les Parties contractantes, une réglementation générale ou particulière en vertu de laquelle doit être accordé aux nationaux ou aux sociétés de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu dans le présent Traité, ladite réglementation prévaut sur le présent Traité dans la mesure où elle est plus favorable.

2. Chaque Partie contractante observe toute autre obligation qu'elle a pu contracter en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 8. Champ d'application du Traité

1. Le présent Traité s'applique aux investissements effectués à compter de son entrée en vigueur par des nationaux ou des sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre. Néanmoins, il s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur et qui, selon la législation de la Partie contractante en question, sont enregistrés comme investissements étrangers.

2. Toutefois, le présent Traité ne s'applique pas aux différends ou réclamations survenus ou occasionnés avant son entrée en vigueur ou se rapportant à des faits survenus avant son entrée en vigueur ou liés à la simple présence de situations préexistantes.

Article 9. Règlement des différends entre États

1. Les différends qui pourraient surgir entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Traité devront, dans la mesure du possible, être réglés à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties contractantes.

2. Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est constitué de façon ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre, et les deux membres ainsi nommés se mettent d'accord pour élire comme Président un ressortissant d'un État tiers qui est nommé par les Gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois et le Président dans un délai de trois mois après que l'une des Parties contractantes a notifié à l'autre son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les délais spécifiés au paragraphe 3 n'ont pas été observés et faute d'un autre arrangement, chacune des Parties contractantes peut inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président serait un national de l'une des Parties contractantes ou s'il était empêché pour une autre raison de s'acquitter de cette fonction, il reviendrait au Vice-Président de la Cour de procéder aux nominations. Si ce dernier lui-même est un national de l'une des Parties contractantes ou s'il était également empêché, il reviendrait au membre de la Cour venant immédiatement à la suite dans l'ordre hiérarchique et qui ne serait pas un national de l'une des Parties contractantes de procéder aux nominations.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais découlant des activités de son arbitre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais du président et les autres frais sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête sa propre procédure.

6. Si les deux Parties contractantes ont en outre la qualité d'État partie à la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, il ne peut, eu égard au paragraphe 1 de l'article 27 de cette Convention, être recouru au tribunal arbitral visé plus haut quand le national ou la société d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante parviennent à un accord conformément à l'article 25 de la Convention. Il reste possible de recourir au tribunal arbitral visé plus haut si une décision du tribunal arbitral institué par ladite Convention n'est pas respectée, ou en cas de subrogation, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Traité.

*Article 10. Règlement des différends
relatifs aux investissements*

1. Tout différend relatif à des investissements, aux sens du présent Traité, entre une Partie contractante et un national ou une société de l'autre Partie contractante se règle, dans la mesure du possible, par des consultations amiables des parties au différend.

2. Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été évoqué par l'une ou l'autre des parties, il est soumis, à la demande du national ou de la société :

- soit aux tribunaux compétents de la Partie contractante impliquée dans le différend;
- soit à l'arbitrage international aux conditions décrites au paragraphe 3.

Une fois qu'un national ou une société a soumis le différend aux juridictions de la Partie contractante impliquée ou à l'arbitrage international, le choix de l'une ou l'autre de ces procédures est définitif.

3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'une des instances d'arbitrage indiquées ci-dessous, au choix du national ou de la société :

- le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la " Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États ", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, quand chaque État partie au présent Traité a adhéré à ladite Convention. Tant que cette condition n'est pas remplie, chaque Partie contractante donne son consentement à ce que le différend soit soumis à arbitrage, conformément au Règlement du Mécanisme complémentaire du CIRDI;
- un tribunal arbitral spécial créé selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

4. L'organe d'arbitrage statue sur la base des dispositions du présent Traité, du droit de la Partie contractante qui est partie au différend - y compris des règles relatives aux conflits entre les lois - et des termes d'éventuels accords particuliers conclus en rapport avec l'investissement, ainsi que des principes du droit international en la matière.

5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.

6. Les Parties contractantes s'abstiennent de traiter par la voie diplomatique les différends concernant l'arbitrage ou une procédure judiciaire engagée jusqu'à ce que les procédures correspondantes aient été menées à leur terme, à moins que les parties au différend ne se soient conformées à la sentence du tribunal arbitral ou à la décision du tribunal ordinaire, selon les termes stipulés dans ladite sentence ou ladite décision.

Article 11. Entrée en vigueur, durée et échéance

1. Le présent Traité doit être ratifié; les instruments de ratification sont échangés le plus tôt possible à Santiago, Chili.

2. Le présent Traité entre en vigueur dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle a lieu l'échange des instruments de ratification. Il demeure pendant dix ans et peut ensuite être prorogé pour une période indéfinie, sauf si l'une des Parties contractantes le dénonce par écrit 12 mois avant son expiration. Passé le délai de dix ans, le Traité peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de 12 mois.

3. Les dispositions du présent Traité restent pleinement applicables y compris dans les cas prévus à l'article 63 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

4. Pour ce qui est des investissements effectués avant la date d'abrogation du présent Traité, les dispositions des articles premier à 11 leur restent applicables pendant les quinze années qui suivent la date de cette abrogation.

Fait à Buenos Aires le deux août mil neuf cent quatre-vingt-onze, en deux exemplaires originaux faisant également foi.

Pour la République argentine :

GUIDO DI TELLA

DOMINGO F. CAVALLO

Pour la République du Chili :

ENRIQUE SILVA CIMMA

CARLOS OMINAMI

PROTOCOLE

Au moment de signer le Traité entre la République argentine et la République du Chili sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés ont adopté en outre les dispositions suivantes, considérées comme faisant partie du Traité.

1) *Ad article 3, point 3*

Dans le cas où l'une des Parties signerait à l'avenir un Accord d'association avec une union douanière ou économique, un marché commun ou une zone de libre échange, il sera convenu d'introduire une modification à l'exception de l'article 3, point 3, paragraphe 1.

2) *Ad article 4*

Pour ce qui est des causes permettant d'invoquer la loi touchant la propriété, les Parties conviennent que la notion de bien commun englobe les causes prévues dans leurs régimes juridiques respectifs en vigueur.

3) *Ad article 5*

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la République du Chili garantit le droit de rapatrier le capital investi par des investisseurs argentins trois ans après la date de l'investissement, conformément au Décret-loi No. 600 de 1974.

Buenos Aires, le 2 août 1991.

Pour la République argentine :

GUIDO DI TELLA

DOMINGO F. CAVALLO

Pour la République du Chili :

ENRIQUE SILVA CIMMA

CARLOS OMINAMI

